Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en América Latina. Los casos de Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú (1990-2005)

Salvador Martí i Pujol

Resumen: El texto explora si existe alguna causalidad entre la presencia y relevancia de los partidos étnicos (PE) en seis países latinoamericanos y las "condiciones favorables" que indican diversas perspectivas de la literatura sobre acción colectiva. Para ello se realiza un análisis cualitativo multinivel orientado a las causas y a las variables que usan la lógica booleana para simplificar estructuras de datos complejos de forma sistemática. Con ello se trata de identificar la variedad de causas causales de la presencia y éxito de los PE en Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y no en Guatemala, México y Perú.

Palabras clave: partidos étnicos (causas de éxito), análisis booleano, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú

Key words: ethnic parties, (account of success), Boolean analysis, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru

¿QUÉ NOS PREGUNTAMOS Y CÓMO?

Durante la última década han emergido diversos actores políticos de matriz indígena en las arenas políticas de distintos países de América Latina. Son muchos los acontecimientos que dan...
muestra de ello. Sin embargo, esta intrusión en el escenario político se ha dado de formas muy diferentes y con un éxito muy desigual de un país a otro. A raíz de esto, muchos analistas se han preguntado por qué en algunos países las movilizaciones indígenas han desembocado en la creación de partidos que realizan reclamos indígenas, con una notable relevancia en sus respectivos sistemas de partidos nacionales y/o regionales, y en otros no.

Con el presente trabajo se intenta averiguar cuáles son las razones de este fenómeno: la permanencia y la relevancia de partidos étnicos en algunos países de América Latina desde inicios de la década de los noventa hasta el primer lustro del siglo XXI. Con esta intención, en las páginas que siguen se intentará averiguar si existen alguna causalidad entre la aparición y relevancia de formaciones indígenas y las condiciones favorables que señala la literatura especializada acerca de la emergencia de actores políticos a través de cuatro ramas interconectadas de la literatura sobre movimientos sociales.

Las cuatro ramas de la literatura son las siguientes:
- la que estudia la estructura de oportunidades políticas (EOP),
- la que analiza los repertorios de acción colectiva elaborados por los actores,
- la que analiza los marcos cognitivos generados por el discurso de los actores, y
- la que analiza las estructuras conectivas de las organizaciones.

En cuanto al concepto de partido étnico (o PÉ a partir de ahora), utilizaremos la definición de Van Cott (2005: 5) en la que se explica que organizados por el área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, la Fundación CIDOB de Barcelona, el CIME de México y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde se presentó un borrador. A todos ellos debo mucho de lo que siento que se expone en este artículo y ninguna de las debilidades, que son de mi exclusiva responsabilidad.

2 Nos referimos a cuatro ramas de la literatura de movimientos sociales que dan prioridad a una perspectiva de procedimiento.
3 No hay acuerdo en la literatura sobre el concepto de “partido étnico”. En este texto se utiliza el concepto acuñado por Van Cott (2005), pero es cierto que a menudo estas formaciones suelen ser coaliciones de formaciones diversas antes que partidos propiamente étnicos; en este sentido, tienen un carácter —sobre todo— pluritórico. Esta característica se señala en el apartado “Consolidación y solidar forma organizativa”, que hace referencia precisamente a la “solidar forma organizativa” y expone que estos partidos, cuando son exitosos, se han apropiado organizaciones políticas ya existentes.

“se entiende por PÉ una organización autorizada a competir en elecciones en la cual la mayoría de sus líderes se identifican como miembros de un grupo étnico no dominante y en cuyas propuestas programáticas están presentes demandas relacionadas con cuestiones culturales y étnicas”.

Por otro lado, operaremos con el concepto de relevancia política como una variable dicotómica en la que es posible diferenciar si ésta existe o no. Se considerará que existe un PÉ con relevancia en aquellos países donde la formación en cuestión tenga capacidad de condicionar la política del país porque forma parte de una coalición gubernamental o debido a que puede condicionar o “chantajear” —en el sentido que confiere Sartori (1980)— las decisiones del gobierno desde la oposición. Esta relevancia, a la vez, puede ser nacional o regional. Será nacional cuando lo expuesto suceda en las instituciones (Ejecutivo y Legislativo) de ámbito nacional y regional cuando ocurra a nivel subnacional, es decir, en aquellas entidades administrativas de rango intermedio, como las regiones o los estados. Contrariamente, un PÉ no tendrá relevancia política (y por tanto se considerará irrelevante) cuando carezca de la presencia institucional que se ha descrito en el párrafo anterior. Con ello el concepto de irrelevancia no significa la inexistencia de PÉ en un país ni su ausencia en las instituciones representativas.

El objetivo de este trabajo es identificar las variables a las que hacen referencia los cuatro enfoques analíticos citados y mostrar si están presentes o no en los seis países que analizamos: Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú. Se han seleccionado estos países debido a que la presencia de población indígena es significativa, si bien con proporciones muy desiguales. Una vez obtenida la batería de variables para los seis países se elaborará un análisis multicausal de carácter comparado utilizando el álgebra booleana y el análisis macrocausal, con la pretensión de ver si es posible establecer un modelo que aporte nuevos ingredientes a las teorías que indagan las razones de la aparición y relevancia de los PÉ en América Latina.

Pensamos que se trata de un ejercicio de interés debido a que la finalidad del trabajo reside en la voluntad de establecer relaciones causales entre las condiciones favorables (según la teoría) existentes en cada país y la relevancia que han obtenido los PÉ en los países en cuestión. Esta indagación se hace, como ocurre en este tipo de análisis, desde el conocimiento de la relevancia o irrelevancia que han adquirido los PÉ en los seis casos analizados. Así, antes de empezar el trabajo sabemos que los PÉ han tenido, durante el periodo estudiado (1990-2005),
relevancia nacional en Ecuador y en Bolivia, y que en Nicaragua tienen relevancia regional. Contrariamente, en México, Perú y Guatemala los PÉ sólo tienen una presencia circunscrita a comunidades y no tienen capacidad de articular proyectos más amplios.

Creemos que vale la pena realizar una exploración en la dirección expuesta, ya que hasta la fecha la mayoría de trabajos sobre este tema se han centrado en estudios de caso de carácter nacional o, cuando son comparados, se han limitado mayoritariamente a analizar variables de naturaleza institucional.

Para ello utilizaremos una técnica comparativa que está ofreciendo novedosas aportaciones en las ciencias sociales. Nos referimos al análisis booleano (basado en la lógica desarrollada por el matemático Boole), que permite considerar de manera sistemática, y no simplemente intuitiva, los efectos de las combinaciones de variables sobre la variable dependiente que estudiamos (Ragin, 1987, 2000), y lo hace integrando un número de casos considerable. De una manera resumida se puede señalar que el método booleano consiste en elaborar una tabla en la que se recogen las características de los casos en las variables independientes y en la dependiente que nos interesa analizar para posteriormente identificar las combinaciones más simples posibles de causas que dan lugar a los resultados que nos interesa explicar, aportando así nuevos elementos para el análisis teórico del fenómeno (Llamazares, 2004).

Finalmente, hay que resaltar que a la hora de diseñar un estudio comparativo de carácter explicativo resulta fundamental poseer un conocimiento tanto teórico como empírico de los problemas que estamos abordando. En nuestro caso, el conocimiento teórico que nos permitirá identificar variables independientes relevantes y los nexos causales plausibles provendrá de los diversos enfoques de la acción colectiva y del universo de casos escogidos.

CONSTRUYENDO VARIABLES INDEPENDIENTES (O LAS CONDICIONES FAVORABLES)

La construcción de las variables que van a figurar como "condiciones favorables que inducen a la presencia y éxito de los PÉ" va a realizarse a partir de las aportaciones de los cuatro enfoques analíticos que estudian los movimientos sociales arriba citados. Para ello expondremos cuáles son desde diversos elementos analíticos los casos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. También cabe destacar el trabajo de Deborah Yashar (2005).

Este tipo de análisis comparativo se denomina también Qualitative Comparative Method, (QCA) y se ha desarrollado con éxito en diversos estudios sobre política latinoamericana, destacando la obra de Wickham-Crowley (1992).

La lógica booleana es inductiva y utiliza variables de naturaleza binaria en una truth table en la que se clasifican diversos tipos de situaciones sociales frente a "decreencias" (las variables dependientes) con la intención de identificar "patrones de causa" a través de una exhaustiva consideración de todas las combinaciones presentes/ ausentes de condiciones sociales. Se trata de identificar la variedad de pautas causales que dan lugar a un fenómeno.
los planteamientos que estos enfoques muestran a la hora de analizar la aparición, desarrollo y éxito de los actores políticos e intentaremos ver cómo pueden operacionalizarse para nuestro caso.

También es importante exponer que a menudo se ha afirmado que la aparición de actores políticos de carácter indígena en América Latina puede interpretarse simplemente a través de la existencia de diferencias étnicas y lingüísticas en la región, así como de la presencia de marginación, explotación y violencia ejercidas a los colectivos étnicamente minoritarios. Si ello fuera así, con la simple relación de datos sobre porcentaje de pobreza relativa de pueblos indígenas, de fragmentación etnomlingüística y de población indígena (tal como se muestra en los cuadros 1 y 2) tendríamos el trabajo solucionado.

Pero cualquier observador informado sabe que de la simple presencia de fenómenos como la “diferencia” o la “subordinación” no se puede predecir la movilización social o política. Haciendo una exploración estadística de los datos que se extraen del cuadro 1 y correlacionándolos con valores asignados a la “relevancia” o “irrelevancia” se puede observar que sí existe asociación entre población indígena y relevancia nacional, así como entre población indígena y fragmentación etnomlingüística,12 y que ésta es positiva. Pero esta correlación está al borde de la significación y dista mucho de explicar satisfactoriamente la realidad. Así las cosas, lo más importante es construir variables causales a través de las teorías que nos ofrecen los estudios de la acción colectiva y que pasamos a ver a continuación.

CUADRO 1
PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA E ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN ETNOMLINGÜÍSTICA EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Porcentaje de población indígena</th>
<th>Índice de fragmentación etnomlingüística</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>71.0</td>
<td>0.5914</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>38.0</td>
<td>0.9234</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>66.0</td>
<td>0.4767</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>15.0</td>
<td>0.1741</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>5.0</td>
<td>0.0992</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>47.0</td>
<td>0.4316</td>
</tr>
</tbody>
</table>


12 El índice de fragmentación etnomlingüística se utiliza para comparar sociedades donde existen diversos distintos étnicos, culturales y lingüísticos. Tiene su origen en los

CUADRO 2
POBREZA EXTREMA ENTRE POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA EN SEIS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Porcentaje de indígenas que viven en la pobreza extrema</th>
<th>Porcentaje de habitantes (sobre el total nacional) que viven en la pobreza extrema</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>64</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>68.8</td>
<td>38.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>87</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>81</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>94</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>79</td>
<td>50</td>
</tr>
</tbody>
</table>


La estructura de oportunidades políticas EOP

Obras como las de Tarrow (1997) y McAdam, McArthy y Zald (1999) exponen que los factores estructurales no predicen la aparición de acción colectiva. Tarrow señala que los detonantes de la acción colectiva son los cambios que se dan en el conjunto de dimensiones consistentes del entorno político, ya que estos cambios pueden fomentar o simplemente facilitar la acción de los grupos bajando el coste de la acción colectiva entre las personas. Es por eso que, según estos autores, el cuándo de una movilización explica en gran medida el porqué y el cómo. Y ese cuándo al que se refiere se ha convenido en calificar como la estructura de oportunidades políticas (EOP)

De esta forma, la EOP pone énfasis en los cambios que se han dado en un entorno concreto y que gracias a éstos aparecen “recursos exteriores” que pueden ayudar (o inducir) a los colectivos subordinados a la acción colectiva, descubriendo aliados potenciales y mostrando trabajos realizados por la academia soviética de los años setenta y posteriormente se ha recuperado y perfeccionado en las ciencias sociales y económicas. Los datos que se citan en la tabla provienen del Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2004) destinado a la diversidad cultural.
todo aquello en que las autoridades son vulnerables a sus demandas y presiones. 15

Hay una nutrida literatura que relaciona la existencia de una EOP favorable y la aparición de nuevos actores políticos. Con el afán de sintetizar los elementos que destaca la literatura como “recursos exteriores” que abren “oportunidades”, es preciso distinguir dos tipos de elementos. Por un lado están los de carácter sistémico, que se refieren a las oportunidades generadas a raíz de cambios en las reglas del sistema político que hacen menos costosa la movilización política y que generalmente se producen por la consagración de nuevas garantías respecto a los derechos y las libertades o por la aparición de nuevas fórmulas de acceso a las instituciones. Y por otro lado los de carácter relacional, que se refieren a la capacidad nuevos actores políticos de entrar en el escenario político. 14

Los cambios presenciados en las últimas décadas en las dos dimensiones expuestas nos pueden dar pistas acerca de la apertura de ciertas oportunidades sobre las cuales han emergido las movilizaciones indígenas de finales del siglo XX e inicios del XXI en América Latina.

Entre estos cambios destacan, en la dimensión sistémica, tres fenómenos. En primer lugar, la creación de Constituciones que garantizan, además de los derechos y libertades democráticas, elementos multiculturales (Van Cott, 2000); en segundo lugar, las reformas de los sistemas electorales que hacen menos costosa la entrada de nuevas informaciones políticas en la competición (Van Cott, 2003), y en tercer y último lugar, los cambios en la organización territorial del poder, descentralizando el sistema político y creando nuevos espacios representativos de proximidad (Van Cott, 2005). Respecto a la dimensión relacional, cabe señalar la debilidad y la fragmentación de los sistemas de partidos existentes en casi todos los países de la región, fenómeno que ha supuesto una notable inestabilidad de las elites políticas y la posibilidad de participar en la contienda electoral con ciertas expectativas (Alcántara, 2003; Coppendge, 1998; Mainwaring y Scully, 1995).

Así las cosas, es posible exponer que la EOP (respecto a los PÉ) presente en los tres últimos lustros en América Latina puede caracterizarse a través de los tres fenómenos que siguen: 1. la presencia de elementos multiculturales en la Constitución; 2. la permeabilidad del sistema de partidos, y 3. una organización territorial del poder descentralizada. Seguidamente intentaremos elaborar diversos indicadores para cada uno de los tres fenómenos y ver si éstos han estado presentes (o no) en los seis países estudiados. Así, los fenómenos se operacionalizarán como variables dicotómicas (presencia o ausencia) que formarán parte de la tabla final del análisis.

Constitucionalismo multicultural

Para observar la presencia de elementos multiculturales en las leyes fundamentales de los diversos países de la región es importante ver cómo fue aprovechada la nueva ola de reformas constitucionales —a raíz de los procesos de apertura y democratización de los regímenes— por los representantes de los pueblos indígenas. En este sentido, la coyuntura política que presentaban los debates públicos en las asambleas constituyentes supuso la apertura de un espacio ideal para que las organizaciones que representaban los intereses de los pueblos indígenas pudieran articular y vehicular sus demandas. 15

Ciertamente, durante las dos últimas décadas representantes indígenas tuvieron la oportunidad de participar —como lo demuestra la presencia de miembros de organizaciones indígenistas en las asambleas constituyentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y las Guayanas— en la redención de las leyes de juego fundamentales del

13 Según esta perspectiva, estos cambios en la EOP suponen siempre la generación de oportunidades. Son éstas las que ofrecen incentivos para la acción colectiva que proponen los movimientos sociales.

14 En esta dimensión también suelen referirse a la aparición de coyunturas internacionales favorables o, tal como se ha calificado desde literatura anglosajona, la concesión con el world time. Pero sobre este aspecto es difícil establecer variables de rango que supongan impactos diferenciados para los distintos países de la región, ya que la aparición de la “coyuntura internacional favorable” que se dio a finales de los años ochenta y en los noventa abarca a todo el continente de una forma semejante. Para mayor información sobre este aspecto, diríjase a Martí, 2003.

15 Con todo, a pesar del reconocimiento formal que se aprecia en los ordenamientos jurídicos, el desarrollo legal y el alcance de las políticas implementadas en cada administración estatal son muy desiguales (Dandler, 2002). De todas formas, es evidente que el efecto de la “enfrascación” de los textos constitucionales ha significado el fin de un largo periodo de “invisibleidad”, a la par que ha supuesto la aparición de incentivos institucionales que potencian la creación de identidades colectivas indígenas en el seno del Estado y la dignificación de sus demandas. De todo ello es posible inferir un progresivo fortalecimiento de los actores de matriz identitaria y de sus movilizaciones.
Estado, otorgando así a las instituciones una legitimidad que antes carecían entre dichas poblaciones.

Según Van Cott (2000), es posible hablar de un constitucionalismo multicultural cuando en una Constitución aparecen tres o más de los elementos que se siguen a continuación, a saber: 1. el reconocimiento formal de la naturaleza multicultural de las sociedades y la existencia de pueblos indígenas como colectivos subnacionales distintos; 2. el reconocimiento de la ley consuetudinaria indígena como oficial y como derecho público; 3. el reconocimiento de los derechos de propiedad y restricciones a la alienación y división de las tierras comunales; 4. el reconocimiento del *status* oficial de las lenguas indígenas en el territorio y espacios donde los pueblos están ubicados; 5. la garantía de una educación bilingüe, y 6. el reconocimiento del derecho a crear espacios territoriales autónomos.

En esta dirección, es posible observar la inclusión de estos elementos en cada uno de los seis países de la región en el cuadro 3. En este cuadro se presenta una columna con los países analizados y otras seis columnas con los elementos que expone Van Cott (2000), y finalmente, en la última columna se señala si la Constitución del país en cuestión puede considerarse "multicultural" y, por tanto, si hay presencia (o no) de la variable "constitucionalismo multicultural". En el cuadro se señala que hay presencia de la variable en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Perú, mientras que en México y Guatemala no la hay.

### Permeabilidad del sistema de partidos

La mayor o menor permeabilidad del sistema de partidos da cuenta de la posibilidad de que en un sistema político dado puedan entrar a competir nuevas fuerzas políticas, rompiendo así un *status quo* partidario. Para que esta característica se dé es necesario la presencia de dos elementos: un sistema electoral inclusivo y un sistema de partidos fraccionado e inestable.

El estudio de las reformas de los sistemas electorales (incluyendo en la definición la administración electoral), y la consiguiente emergencia

---

16 Para un análisis detallado de la legislación étnica en los diversos países, dirigirse al Índice Legislativo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

---

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0**</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FUENTE:** adaptado de Van Cott, 2000

* La práctica ausencia de elementos multiculturales en la Constitución de Guatemala se debe a que en el referéndum que se celebró en 1998 para reformar, con la intención de incorporar elementos significativos (entre ellos elementos multiculturales) que hacían referencia a los Acuerdos de Paz de 1996, el resultado fue negativo.

** La propiedad colectiva en México es el ejido, y éste no guarda relación con la existencia de pueblos indígenas de nuevos partidos, es, probablemente, uno de los temas más trabajados en la ciencia política comparada de los últimos años (García Díez, 2005). Los sistemas electorales, tal como expone Coppendge (1998), crean una estructura subyacente que "soporta y restringe la evolución de los
sistemas de partidos” y explica en parte la variación de los sistemas de partidos en los países.

Precisamente por ello, en este apartado es preciso hacer una prospección de los cambios en el sistema electoral para observar cuáles se han transformado y en qué dirección. Para ello acudimos a diversos trabajos que estudian la apertura de los sistemas de partidos a través del análisis de la representación proporcional (considerando la fórmula y la magnitud del distrito), la rebaja en los umbrales de representación, la existencia de escaños reservados para las listas electorales de carácter étnico y la presencia o no de requisitos para tener acceso y permanecer en la arena electoral.

De la literatura analizada destaca la ausencia de reformas electorales en el sentido de dotar de mayor “inclusividad” en Guatemala, México y Nicaragua, mientras que sí las hubo en Ecuador, Bolivia y Perú. En el caso del Ecuador, hubo cambios favorables respecto al incremento de la magnitud de la circunscripción bajo representación proporcional y en el acceso a la inscripción de las formaciones independientes para obtener el voto. En los casos peruano y boliviano, destaca el incremento de la magnitud de la circunscripción bajo representación proporcional. Estos datos se exponen gráficamente (con el indicador de presencia o ausencia) en la segunda tabla del cuadro 4.

En cuanto a la existencia de circunscripciones específicas, creadas para dar voz a “territorios” con alta concentración de poblaciones indígenas, se observa que sólo Nicaragua ha creado dos circunscripciones especiales: la de la Región Autónoma Atlántico Norte y la de la Región Autónoma Atlántico Sur, en las que se facilita la representación de las minorías étnicas presentes en la costa caribe. El caso mexicano, respecto a la existencia de circunscripciones específicas para representación de colectivos indígenas, es ambiguo, debido a que la existencia de reglamentos de usos y costumbres ha supuesto un mecanismo singular.


19 Véase sobre este tema el texto de Madrid (2003).

### CUADRO 4
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE "PERMEABILIDAD DEL SISTEMA DE PARTIDOS"

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Sistema electoral inclusivo</th>
<th>Solares del sistema de partidos</th>
<th>Presencia de la variable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Permeabilidad del sistema</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Electoral</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>1</td>
<td>4.75 Alto</td>
<td>36.9 Alto</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>1</td>
<td>6.14 Alto</td>
<td>31.4 Alto</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>0</td>
<td>5.25 Medio</td>
<td>41.0 Alto</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>0</td>
<td>2.48 Bajo</td>
<td>16.4 Bajo</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>0</td>
<td>2.28 Bajo</td>
<td>15.0 Bajo</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>1</td>
<td>4.22 Alto</td>
<td>52.5 Alto</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**FUENTE:** Índice de volatilidad electoral sobre la base del porcentaje de escaños 1990-2002, de los anexos del informe del PNUD, 2004: 63, 65, 68

Del cuadro 4 pretendemos operacionalizar la variable "permeabilidad del sistema de partidos". Partimos de que existe un sistema de partidos permeable siempre que hay un índice de número efectivo de partidos y de volatilidad electoral medio o elevado (fenómeno que ocurre en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú) o un sistema electoral permeable (como acontece en Bolivia, Ecuador y Perú) o, en su ausencia, la existencia de una circunscripción específica destinada a representar a una zona con presencia de comunidades indígenas (que es el caso de Nicaragua). En esta dirección, la presencia de la variable "permeabilidad del sistema de partidos" se da en todos los países menos en uno: México.

Descentralización del Estado

La organización territorial del Estado experimentó una notable transformación en la mayoría de países de América Latina durante el periodo analizado. Después de las reformas democratizadoras de los años ochenta siguieron, en la década siguiente, las que descentralizaron la mayoría de Estados (Jordana y Gomá, 2004). Estas últimas reformas (las descentralizadoras) fueron impulsadas "desde arriba" y "desde abajo". El impulso "desde arriba" vino por parte de dos actores. Uno de ellos fue el conjunto de organizaciones internacionales públicas - destacando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) — que apostaron por una mayor descentralización del Estado en una época en que el modelo "estadocéntrico" (estatista y corporativo) llegó a su fin debido a la crisis de la deuda y cuando las doctrinas de la governance aconsejaban una descarga de competencias desde el gobierno central hacia las regiones y municipios —además de la privatización y externalización de servicios. El otro actor fue la coalición de "redes de defensa" de los derechos de los pueblos indígenas, que una vez que consiguieron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobara el Convenio 16921 impulsaron iniciativas para que los gobiernos de los países de la región lo ratificaran, dando la oportunidad a que las comunidades indígenas pudieran crear administraciones propias y más adecuadas a sus necesidades (Brysk, 2000; Kec y Sikkin, 1998). En cuanto al impulso "desde abajo", se dio por la presión de diversos colectivos que querían tener espacios de representación de proximidad. Dentro de este colectivo coincidieron actores muy heterogéneos, desde elites regionales que desafiaban el "centralismo capitalino" de algunos gobiernos nacionales hasta organizaciones indígenas que reivindicaban el reconocimiento de identidades, lenguas y derechos consuetudinarios.

A raíz de esta dinámica aparecería una doble oportunidad para la emergencia de lo étnico. Por un lado, porque en el proceso de redefinición...
del nuevo diseño territorial surgirán demandas de derechos específicos por parte de algunos pueblos indígenas, y por otro porque la simple posibilidad de elegir representantes en los espacios institucionales cercanos (como el local o regional) podría suponer la aparición de cargos electos pertenecientes a dichas comunidades. En esta línea, un importante sector de la academia y de los organismos internacionales interpretó el “autogobierno” de comunidades indígenas como un mecanismo “beneficio” que podría significar una mayor participación de los pueblos indígenas en la sociedad a través de instituciones propias insertadas en el entramado institucional del Estado (PNUD, 2004: 47-72).

Durante los tres lustros analizados, la mayoría de los países estudiados llevó a cabo reformas en su organización territorial. En el caso de Bolivia, durante ese periodo se experimentó una doble presión: “desde arriba”, las elites regionales de la “media luna” (de las regiones de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni) atizaron sus demandas autonomistas, y “desde abajo” aparecieron demandas de los pueblos indígenas desde los municipios y las comunidades. Ante dichos acontecimientos, las autoridades del país elaboraron una legislación más descentralizadora.

En el marco de esta política se promulgó en 1994 la Ley de Participación Popular (LPP), que creó un fondo para las municipalidades (con la coparticipación de los ingresos fiscales nacionales y una fórmula especial de reparto) con lo que se multiplicó la creación de municipalidades (Oshorn, 2004). Antes de 1994, la estructura territorial del país se dividía en departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones, y después de la LPP las secciones de provincias se convirtieron en municipios. Posteriormente, según la Ley de Descentralización de 1995, la estructura del Estado quedó articulada por nueve departamentos, con un prefecto y un concejo departamental, por las provincias (dirigidas por subprefectos) y municipios (cuyo ejecutivo era el alcalde y su legislativo el concejo municipal), y dentro de éstos se ubicaron los distritos municipales y entre ellos los distritos municipales indígenas, en tanto que entidad expresamente establecida por ley. En esta estructura, hasta 2005 los prefectos eran nombrados por el Ejecutivo, los subprefectos por los prefectos y los alcaldes y su concejo eran elegidos por voto directo de los ciudadanos. De lo expuesto destaca que la “democratización territorial”

21 Los datos que se presentan se han obtenido de la base de datos del IAN sobre legislación indígena.
22 A finales de 2005 se convocó a la elección de prefectos, que son los que actualmente están a cargo de cada departamento.
23 La jurisdicción del pueblo indígena no es el municipio, sino el territorio tradicional de la comunidad.
24 En el caso de Ecuador, también se observa una doble presión durante la década de los noventa. Desde arriba se formó una coalición de elites regionales de la región Pacífico (sobre todo del Guayas) que empezó a demandar mayor autonomía de su región, mientras que desde abajo aparecieron demandas de organizaciones indígenas, sobre todo pueblos de territorios “serranos” (como son Cotopaxi, Cañar, Bolívar, Imbabura, Chimborazo) y del Amazonas, con alta densidad de población indígena pero poca población relativa en el país.
25 La organización territorial del país, según la Constitución de 1997 (que entró en vigor en 1998), se articuló a través de la provincia, con un concejo provincial, conformado a través de un sistema de elección mixto (directo e indirecto) y un prefecto (escogido por sufragio directo), cantones del que aparecen municipios, con su alcalde y su concejo municipal elegidos por sufragio directo; y la parroquia, con una junta parroquial. La Constitución de 1998 también incorporó referencias a “circunscripciones y territorios indígenas”, si bien no definió muy bien de qué se trataba. Posteriormente se desarrollaron dos leyes que enfatizaron la posibilidad de incluir la participación de los pueblos indígenas en instancias subnacionales, aunque nunca tuvieron una relevancia sustantiva.
26 Respecto a Guatemala, si bien durante la década de los noventa, a raíz del proceso de paz, existió presión “desde arriba” por parte de la comunidad internacional para que se crearan espacios de autonomía
territorial que tuvieran en cuenta a las comunidades indígenas, el resultado negativo del referéndum de 1998 sobre las reformas que deberían implementarse (siempre a raíz de los acuerdos de paz) paralizaron dicho proceso. Por ello la única referencia a los pueblos indígenas en este aspecto aparece en el Decreto 12/02 del Código Municipal (en el artículo 20), que hace referencia a comunidades de los pueblos indígenas y afíenta a que se inscriban al registro civil del municipio exponiendo su organización, administración interna, valores, autoridades tradicionales reconocidas, pero sin ninguna especificación de su rol potencial o de sus competencias.

El caso de México es singular, ya que si bien se trata de un país federal compuesto por 32 estados y con una larga historia sobre políticas (muchas veces nominales) destinadas a los pueblos indígenas, no fue sino hasta 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que apareció en la agenda política el tema de la autonomía indígena. Después de un largo y conocido proceso de negociaciones, se empezó a legislar en el Congreso sobre el tema en 2001, pero con un resultado menor (si se tienen en cuenta las expectativas despertadas) y el tema cayó en punto muerto (Assies, 2000; Aragón Andrade, 2007). Ciertamente, después de 2001 se reformó la Constitución, y en ésta se presentó al país como único e indivisible, si bien expone el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el marco de la Constitución y señala que el reconocimiento se hará en las entidades federativas correspondientes y según el desarrollo legislativo de dichas entidades.

En cuanto a Nicaragua, a finales de los años ochenta las autoridades sandinistas respondieron a la presión “desde abajo” de grupos miskitos, mayagnas y ramas alzados en armas en la guerra de la Contra, y a la presión “desde arriba” ejercida a través de negociadores internacionales, creando instituciones representativas en los espacios territoriales donde las comunidades indígenas tenían una importante presencia. Esta reforma institucional se efectuó con la aprobación de la Ley 28/87. Esta ley era un Estatuto de Autonomía para dos regiones: la Región Autónoma Atlántica Norte (RAAN) y la Región Autónoma Atlántica Sur (RAAS), con entidad propia, competencias y autoridades, así como la existencia de un consejo regional, un coordinador regional y autoridades municipales comunales. Por todo ello es posible afirmar que Nicaragua es, claramente, un país descentralizado en clave multicultural y multietnica (Palenzuela, 2004).

El caso de Perú es el que ha mostrado una dirección más errática. Si bien actualmente los niveles de descentralización política son tres (departamento, provincia y municipio distrital), la organización territorial del Estado sufrió notables transformaciones en pocos años. Las unidades administrativas que originalmente se llamaron departamentos se crearon en 1989, pero su vida fue corta, ya que con la llegada de Fujimori se volvieron y no fue sino hasta el año 2002 que se “reactivaron” y se realizaron nuevas elecciones para elegir presidentes y consejos departamentales. Poco después, en el 2005, se efectuó un referéndum para consultar a la población de los departamentos sobre si estaban de acuerdo con la conformación de las regiones que les afectaban (generalmente por fusión de departamentos), pero en ninguna región se alcanzaron los votos suficientes para conformarse como tales. A la vez, en este proceso nunca se habló de comunidades indígenas como sujeto político ni de la necesidad de crear circunscripciones específicas o entidades municipales para dar visibilidad a los pueblos indígenas.

De lo expuesto es posible crear la variable “descentralización” a partir de los dos indicadores que hemos analizado anteriormente: la existencia (o no) de niveles políticos intermedios electos y la de entidades comunales que privilegian presencia indígena. En este sentido, daremos cuenta de que existe la variable “descentralización” en aquellos países que han creado espacios de representación a nivel subnacional (como ocurre en Ecuador, México y Nicaragua) y/o entidades autónomas para comunidades indígenas (que es el caso de Bolivia y Ecuador). Así las cosas, de los seis casos que analizamos se constata —tal como se resume

29 Por ello actualmente está vigente la disposición transitoria de la Constitución, y como no se conformaron las regiones, que deben aprobarse por referéndum, éstas coinciden con los límites de los anteriores departamentos. La última elección a nivel regional fue el pasado noviembre de 2006.

39 Las comunidades indígenas se asimilaron a las “comunidades campesinas”, y así consta en el artículo 89 de la Constitución cuando expone que las “comunidades campesinas y nativas” tienen existencia legal y personal jurídica y se desarrolla en la Ley 24656/97, Ley General de Comunidades Campesinas, y en el Reglamento de Ley General de Comunidades Campesinas de 1991.
en el cuadro 5 —que el único país que mantiene un sistema político
centralizado es Guatemala, donde hay ausencia de la variable

CUADRO 5
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE "DECENTRALIZACIÓN"

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Existencia de niveles políticos intermedios efectivos</th>
<th>Existencia de entidades comunales que privilegian presencia indígena</th>
<th>Presencia de la variable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>0</td>
<td>1 Distritos Municipales Indígenas</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>1 Provincia</td>
<td>1 Parroquias</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>1 Estado</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>1 Regiones</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Autónomas</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>1 Departamentos y provincias</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

El repertorio de acción colectiva

Frente a los analistas que sostienen que las movilizaciones son fruto de la aparición de una EOP, están quienes apuntan que la "oportunidad" tiene un fuerte componente cultural y que se pierde algo importante cuando se limita la atención al análisis de las transformaciones aceleradas en las instituciones políticas o en las relaciones entre actores políticos (McAdam, 1998: 91). En esta dirección, Gamson y Meyer (1999) exponen que "las oportunidades políticas abren el camino para la acción política, pero los movimientos sociales con su repertorio de contienda también crean las oportunidades para ésta".

Ciertamente, la relación entre la EOP y las acciones que emprenden los movimientos sociales es fluida, impredecible y crucial, pues si bien las EOP restringen y facilitan simultáneamente la acción colectiva a un amplio abanico de grupos, éstos a veces actúan independientemente de las oportunidades, incidiendo en las instituciones e incluso creándolas. Así, a pesar de que se suele afirmar que los movimientos sociales surgen como respuesta a las oportunidades que el medio ofrece, también es cierto que su desarrollo se ve firmemente determinado por sus propias

acciones, que se inscriben y transmiten culturalmente y que pueden calificarse —como lo hace Charles Tilly (1978)— como el "repertorio de confrontación" o "repertorio de acción colectiva".

Las funciones del "repertorio de confrontación" son tres: 1. comunicar y transmitir las exigencias de los movimientos sociales; 2. generar solidaridad e identidad entre los miembros y vincular a los líderes con sus seguidores, y 3. desafiar a sus adversarios a partir de la creación de incertidumbre (Marti, 2002). En cuanto a las estrategias y el repertorio de los movimientos sociales, pueden ir desde la acción colectiva violenta hasta la utilización de acciones convencionales. Entre estos dos extremos existe un abanico de propuestas políticas cambiantes que utilizan la "disrupción" y pueden calificarse como política disruptiva o transgresiva (McAdam, Tilly y Tarrow, 2005).

Si tuviéramos que trabajar la historia de la acción colectiva de las comunidades indígenas de América Latina nos encontraríamos con que es tan longeva como el conocimiento que tenemos de ellas. Con todo, en este apartado observaremos, por un lado, la capacidad que han tenido los movimientos indígenas del subcontinente para armar un amplio repertorio de acción colectiva con capacidad disruptiva y, por otro, el peso que aún tiene hoy el recuerdo de algunas guerras (o, mejor dicho, campañas de terror) desatadas en algunos países durante los años inmediatamente anteriores a la ola de emergencia indígena en la región. Así las cosas, las variables que se desprenden de este enfoque son, en primer lugar, la capacidad contenciosa de los movimientos indígenas y, en segundo lugar, la presencia de conflictos violentos recientes de gran intensidad.

La capacidad contenciosa: campañas transnacionales y disruptión

En los tres últimos lustros las comunidades indígenas han empleado un repertorio estratégico de protesta que les ha permitido multiplicar las bases movilizadas, a la par que conseguir nuevos apoyos en los niveles nacional e internacional (Brysk, 2000). Para ello los movimientos indígenas han desplegado una variada gama de acciones de carácter innovador, desistiendo de recurrir a la vía armada30 y utilizando la

30 Incluso en un movimiento autodenominado "insurgente" como el EZLN la dimensión política, el repertorio no violento y la negociación se han priorizado en todo momento a la vía armada. De hecho, desde el levantamiento de 1994 el EZLN no ha
violencia de forma muy puntual y casi nunca contra la integridad física
de las personas (Ireland, 2003).

En el sentido expuesto en las movilizaciones indígenas de “nuevo cuño” es posible observar el tránsito de actividades de “contienda
contenida” a otras de “contienda transgresiva” y viceversa (Gómez, 2003,
2004). En este tipo de movilizaciones la actividad política convencional
y la no convencional se presentan como algo profundamente interre-
lacionado y consistente a la “dinámica de la contienda política.” Las
expresiones políticas de “contienda transgresiva” realizadas desde los
collectivs indígenas han mostrado una gran capacidad de innovación en
cuanto al repertorio de estrategias de movilización que se iniciaron con
las marchas sobre las ciudades para denunciar la celebración del V
Centenario del Descubrimiento de América y proclamar Quinientos Años
de Resistencia Indígena y Negra.

Desde entonces cabe destacar la existencia de dos tipos de acción
colectiva: por un lado, la organización de campañas internacionales de
apoyo a las demandas de los pueblos indígenas y, por otro, la organización
de manifestaciones y marchas con capacidad de paralizar el desempeño
normal de la vida cotidiana de los países (o regiones) donde se desa-
rrrollan. Para no exponer detalladamente la lista de campañas de ámbito
conocionales desarrolladas durante la última década ni la sucesión de
actividades disruptivas acaecidas en la región nos basamos, para el primer
tipo de acción colectiva, en el trabajo de Brysk (2000) y, para el segundo,
en los datos que se exponen en el proyecto de Minorities at Risk, dirigido
por Ted Gurr en el marco del Center for International Deve-
lopment and Conflict de la Universidad de Maryland.

Respecto a la organización de campañas internacionales de apoyo a
las demandas de los pueblos indígenas destacan las acontecidas en
Ecuador, con las campañas lideradas por el Ecuador Network, y con gran
intensidad los de México a raíz del levantamiento del EZLN en 1994. En
developamiento ninguno offensiva militar y ha instado, en cambio, a movilizar politica-
mente a la sociedad civil.

Según McAdam, Tilly y Tarrow (2005: 15, 149) a partir de la “dinámica de la con-
tienda política” se inician episodios en los que se democratizan o transforman los sistemas políticos.

Los datos detallados por las diversas comunidades indígenas de cada uno de los
países de América Latina puede obtenerse en <http://www.idem und etut/ius/inac/mex>

Sobre las movilizaciones de redes internacionales a favor de los pueblos indígenas
en Ecuador cabe dirigirse a la obra de Brisk (2000). Respecto al caso mexicano, existe
cuanto a la organización de manifestaciones y marchas con capacidad de
paralizar el desempeño normal de la vida cotidiana de los países (o regiones) es preciso anotar los casos de Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua. De lo expuesto es posible crear la variable “capacidad contenciosa” observando si en los casos analizados se han desarrollado los dos fenómenos que nos sirven de indicadores; a saber, campañas trans-
nacionales y/o desarrollo de actividades disruptivas de ámbito nacional.
En el cuadro 6 se puede observar que en Ecuador y en México se han
dado los dos fenómenos, y en Bolivia y Nicaragua uno, siendo estos países
donde existe la presencia de la variable “capacidad contenciosa”.
Contrariamente, en Perú y en Guatemala la variable está ausente.

Cuadro 6
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE “CAPACIDAD CONTENCIOSA”

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Activación de campañas transnacionales</th>
<th>Desarrollo de actividades disruptivas de ámbito nacional</th>
<th>Presencia de la variable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>I</td>
<td>I</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>I</td>
<td>I</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Conflicto violentos recientes de gran intensidad

Durante la década de los ochenta no hubo conflictos bélicos entre países
en América Latina. Las guerras que existieron en la región fueron
conflictos internos en el seno de sistemas políticos autoritarios,
una extensa literatura sobre las redes transnacionales de solidaridad que se activaron a

Es imposible analizar la inestabilidad política durante la década de los noventa e
inicios del siglo XXI en Bolivia y Ecuador sin señalar el rol que han tenido los movimien-
tos indígenas; sobre este tema creemos necesario hacer referencia a las obras de
Barrera (2001) y Selverston-Scher (2001) para el caso ecuatoriano, y a las de Domingo
referencia las movilizaciones acontecidas en la región caribe, donde desde inicios de los
ochenta diversa formaciones (como MISUR, de carácter político-militar y confederada a
pseudodemocráticos o en transición. De ello se deduce que durante los lustros analizados la mayor parte de la violencia fue administrada por el Estado o por ejércitos irregulares.

De los seis países que estamos analizando cabe distinguir por un lado los casos de Guatemala, Nicaragua, Perú y México, y por otro los de Bolivia y Ecuador. En los cuatro primeros hubo conflicto social y político con presencia de grupos armados irregulares y con actividad de las fuerzas armadas, aunque con características muy diferentes en cada caso, mientras que en los dos países andinos, Bolivia y Ecuador, no hubo conflictos.

En los dos países centroamericanos hubo conflictos civiles remanentes de luchas insurgentes, aunque con una capacidad de fuego muy desigual, según el caso. En el caso de Guatemala, cuyo gobierno estuvo bajo regímenes militares desde 1954 hasta 1986, la primera mitad de la década de los ochenta se caracterizó por una administración extremadamente violenta por parte del Estado, pues la cantidad de víctimas generadas por la represión nunca guardó relación con la capacidad de fuego de las fuerzas insurgentes. A raíz de esta política, las regiones septentrionales, con una importante presencia de población indígena (como son el Petén, Quiché, Ixcan, Alta Verapaz y Huehuetenango), quedaron semidespobladas. Por ello puede decirse que existió un "estado terrorista" que generó (si bien es difícil ponerse de acuerdo en el número de víctimas) 250 000 muertos por motivos políticos desde 1961 (mayoritariamente entre 1980 y 1987) y más de 300 000 desplazados hacia el sur de México, la mayoría de ellos indígenas.

También se ha considerado esta estrategia contrainsurgente como un acto de destrucción cultural. 35 Lo ocurrido en Nicaragua es notoriamente distinto a lo que aconteció con su vecino septentrional. En primer lugar porque la violencia no se desencadenó por parte del Estado con políticas punitivas hacia las comunidades indígenas, sino que éstas rechazaron las nuevas estructuras de poder del gobierno sandinista, que chocaban con sus autoridades tradicionales, con lo que empezó a emerger un conflicto que rápidamente aprovechó la administración estadounidense. 36 Y en segundo lugar porque en Nicaragua los pueblos indígenas de la costa atlántica —los mayas, ramas y miskitos— eran protagonistas activos del conflicto más que víctimas pasivas, ya que en ese país las organizaciones de estos pueblos, con el apoyo de Washington y de las diversas entidades que componían la Contra, fundaron la organización político-militar llamada MISURA (que posteriormente se integró a la resistencia nicaragüense), que se enfocó en el proyecto de guerra de baja intensidad tutelada por el gobierno de Reagan. 37 Dicho conflicto cesó en 1987, cuando las organizaciones indígenas firmaron la paz con las autoridades sandinistas a cambio de la aprobación de un estatuto de autonomía para la costa atlántica.

En cuanto a México, el fenómeno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ubicado en Las Cañadas de la velva Lacandona de Chiapas, es difícil de describir como una guerra clásica y tampoco es posible señalar el proceso político acontecido en el sureste de México como de violencia, y menos de violencia extrema. Ciertamente, después del primer día de enero de 1994 hubo un enfrentamiento armado en la zona que ocupó el EZLN, que se limitó a los municipios de Chenalhó, Comitán, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, pero rápidamente se llegó a un "alto al fuego" por la presión social que ejerció la sociedad mexicana a la administración de Salinas. 38 Desde entonces (y hasta la

37 Sobre la llamada "guerra de baja intensidad" desplegada por Estados Unidos y la guerra de la Contra véase Martí (1997).
38 Desde 1994 hasta la fecha ha aparecido un ingente volumen de literatura sobre el abandono del EZLN y el conflicto en Chiapas. Dos textos relevantes que analizan la evolución del conflicto y sus intentos son los de Tello Díez (1995) y Harvey (1994).
La estrategia seguida por el gobierno mexicano ha sido de aislamiento, cooptación y, en algunos casos, acoso. 39 Por otro lado, el EZLN, desde el inicio del siglo XXI, suspendió las negociaciones con el gobierno y optó por emprender un proceso de "autonomía" en los territorios que tenía presencia y cierto control a través de las juntas de buen gobierno —sin discrepancias y conflictos dentro de la "comunidad" zapatista (Estrada Saavedra, 2007: 499-566).

En el caso de Perú, a diferencia de lo acontecido en Nicaragua y México, y al igual que en Guatemala, se desencadenó una dinámica de terror. Durante la década de los ochenta e inicios de la década de los noventa la organización militar Sendero Luminoso se apoderó de la mayor parte de las tierras altas del país, siendo la sierra de Ayacucho el epicentro. Esta organización político-militar se afirmó durante toda la década de los ochenta en la sierra y a través de un mensaje apocalíptico ejecutó un siniestro plan de exterminio de una gran parte de los miembros de las comunidades indígenas, pues 70% de sus víctimas fueron indígenas (De Gregory, 1990, 1993). Según los datos ofrecidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR, 2003; COMISEDH, 2003), Sendero Luminoso no se convirtió tanto en una "guerrilla étnica" sino una guerrilla "etnicida", a la que posteriormente el Estado combatió a través de contundentes políticas contrainsurgentes que golpearon una vez más a la comunidad indígena de las tierras altas del Perú. 40 Tal como expone Basombrío (1999: 414):

"la irrupción de Sendero Luminoso en 1980 y el tipo de actuación que desarrolló en los años posteriores rompió todos los esquemas hasta entonces contemplados en América Latina. Por primera vez un movimiento de este tipo desarrolló una práctica sistemática de agresión a la población civil que...

39 Entre las operaciones de acoso destaca la matanza ocurrida el 28 de diciembre de 1997, cuando un grupo de paramilitares asesinó a 45 hombres, mujeres y niños en la comunidad tzotzil de Acteal. Sobre This insurgencia frente al proyecto zapatista destaca la obra de López y Rivas (2004).

40 En 1983 y 1984 las fuerzas armadas del Perú llegaron a la sierra y emprendieron una campaña de violencia que se conoce como la "guerra sucia". En dicho bienio, en cinco provincias de Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Pajardo) se produjeron 5 645 muertes, que fueron el 46% del total que se produjo en Ayacucho en los 14 años que duró el conflicto y el 50% del total que se produjo en todo el país en el mismo periodo. La concentración de la violencia fue de tal magnitud que si se hubiera realizado en la misma proporción de Huanta, en Lima la cifra hubiera sido de 213 435 personas (Basombrío 1999: 424).

A esa ola de violencia que se ensañó en la región de Ayacucho se sobrepusieron tres actores que reforzaron la dinámica de la violencia: Sendero Luminoso, las fuerzas armadas y las rondas campesinas. 41 El fruto de ello fue un golpe profundo a la vida cotidiana de las comunidades campesinas indígenas de la región central del Perú, y con mayor énfasis en los departamentos de Ayacucho.

A raíz de lo expuesto al pensar en la variable que muestra la existencia de procesos de intensa represión y violencia sobre poblaciones indígenas, optamos por señalar solamente la presencia o la ausencia de estos procesos. Una presencia que sólo se otorga en los casos de Perú y Guatemala, como se concluye del texto que precede a este párrafo.

CUADRO 7
CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE
"VIOLENCIA INTENSA CONTRA COMUNIDADES INDÍGENAS"

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Presencia de la variable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Consolidación y sólida organización
La otra aproximación teórica a los actores políticos focaliza su trabajo en el estudio de la agregación de intereses y la capacidad de generar redes de movilización poniendo el énfasis en su estructura organizativa. Esta perspectiva parte de la premisa de que la forma en que se organiza un

41 Existe una amplia literatura sobre la violencia en Perú durante la época de Sendero Luminoso. La obra editada por Steve J. Stern (1999) ofrece una visión amplia y ponderada.
actor determina el curso, el contenido y los resultados de su acción (Tarrow, 1997). Así, este enfoque se centra en el estudio de las estructuras de movilización, definidas como "los canales colectivos tanto formales como informales a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse a la acción colectiva" (McAdam, McCarthy y Zald, 1999: 24). Para hacer una aproximación que nos aporte una variable significativa para las preguntas que se formulan en este texto analizaremos la solidez organizativa de los movimientos indígenas.

La forma en que los teóricos se han aproximado al estudio de la organización informal de los actores políticos ha sido la teoría de la movilización de recursos (McCarthy y Zald, 1973; Kriesi, 1999, y McAdam, 1980), la cual ha puesto el interés en el análisis comparado de las infraestructuras organizativas de los actores con el objetivo de comprender mejor los patrones históricos de la movilización y predecir cuáles facilitan la emergencia, eficacia y consolidación de los movimientos. De ello se infiere que las decisiones que los activistas toman respecto a la forma que adopta la organización tienen importantes consecuencias en relación con su capacidad de obtener recursos y movilizar a sus fieles, así como en el grado de legitimidad que adquiere el movimiento a los ojos de la sociedad. También se afirma que la forma, además de dar estructura y cuerpo a la identidad y a la acción de las organizaciones, puede ayudar (o dificultar) a la creación de relaciones con otras organizaciones (o movimientos) y con las mismas instituciones.

El estudio de la organización de los movimientos ha obtenido últimamente un renovado interés, hasta el punto de que McAdam, Tilly y Tarrow (2005) han hecho eco de dos "mecanismos" fundamentales que deben operar para que un movimiento pueda convertirse en un actor político relevante en la arena política. Estos mecanismos son los de correduría y apropiación social.

El primer mecanismo hace referencia a la capacidad que el núcleo duro de los activistas de un movimiento tenga a la hora de hacer conexiones entre dos o más enclaves sociales previamente desconectados, pudiendo crear así nuevos actores colectivos potenciales (McAdam, Tilly y Tarrow 2005: 103). La presencia o ausencia de este mecanismo estará vinculada a la existencia (o no) de redes organizativas densas en los movimientos indígenas de cada uno de los países analizados. Así, para observar si se da el mecanismo de la correduría (y en qué grado está presente) es necesario analizar el formato organizativo de estos movimientos, advirtiendo su presencia en aquellos movimientos articulados sobre un complejo

entramado de coordinación multinivel de base comunal, local, regional y estatal. En este caso, las organizaciones meramente comunales-locales suponen una pobre densidad asociativa y la ausencia del mecanismo, mientras que la existencia de vínculos entre los movimientos locales y las asociaciones regionales da cuenta de una mayor coordinación geográfica y lingüística, con la capacidad de abordar problemas complejos, como los que emanan del pluralismo étnico, de la no correspondencia entre etnia y territorio o de la convivencia entre mestizos, colonos y diversas etnias indígenas. Finalmente, los movimientos que tienen un espacio de coordinación real a nivel nacional presentan la existencia del mecanismo de la correduría.

El segundo de los mecanismos, el de apropiación social (McAdam, Tilly y Tarrow 2005: 111-112), nos da cuenta de la capacidad que tienen determinados movimientos de penetrar y atribuirse otros espacios sociales, con sus identidades colectivas "a disposición", para ponerlas al servicio de la causa de los primeros. Generalmente estos "espacios sociales" han sido comunidades eclesiásticas de base, formaciones partidarias o redes gremiales. En esta dirección, es preciso observar cuáles han sido los campos multiorganizativos previos a la creación de grandes movimientos que luego han dado vida a partidos políticos indígenistas. Entre ellos debe observarse si en la creación de los partidos indígenistas se han insertado organizaciones campesinas locales, formaciones de activistas pertenecientes a grupos revolucionarios de la izquierda, intelectuales indígenas y sus asociaciones y redes de las iglesias católica y protestante, o incluso antiguas formaciones políticas.

En caso de que los movimientos indígenas hayan tenido la posibilidad de "apropiarse" de estos campos, éstos han dispuesto rápidamente de sus recursos materiales, políticos, simbólicos, intelectuales y morales. Sobre este mecanismo cabe observar el éxito que tuvieron los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia para apropiarse de redes campesinas, eclesiásticas e incluso de formaciones partidarias. Otros casos de apropiación, aunque menos intensos, se dieron en Nicaragua a partir de las ochenta cuando la Iglesia moraba dio su apoyo incondicional a la formación MISURA y YATAMA (Vilas 1991).

Como caso de contraste aparece Guatemala, ya que si bien a mediados de los años noventa la URNG pudo haber sido una plataforma de reivindicación indígena, sus magros resultados electorales y sus luchas intestinas terminaron por hacerla inviable. El caso mexicano podría ser —una vez más— objeto de polémica debido a que si bien existe una notable densidad del campo organizativo, éste es muy heterogéneo; a la par, las organizaciones de tercer nivel que existen son débiles y se encuentran enfrentadas a raíz de contenciosos políticos; por ello señalamos que las organizaciones realmente sólidas y relevantes son las de nivel local, con poca articulación regional e interregional. Respecto a la capacidad de apropiación de entornos, en algún momento pudo parecer que el EZLN se "apropió" de redes asociativas de la izquierda radical del país, pero posteriormente se observó que fue, sobre todo, una alianza estratégica (Rovira, 2005). La incapacidad de consolidar y extender territorialmente una organización política de carácter civil —como pretendió ser en un momento el EZLN— lo constatan.

De lo expuesto podríamos inferir que los dos elementos relevantes en el estudio de la estructura organizativa de los actores políticos indígenas son: 1. la existencia de formas organizativas sólidas previas a nivel regional y nacional que generan cohesión y solidaridad para los movimientos indígenas antes de convertirse en un partido, y 2. la capacidad de apropiación social de redes sociales preexistentes —los llamados campos multiorganizativos— y de heredar organizaciones ya formadas, con una imagen previamente constituida y una elite política entrenada.

En el cuadro 8 es posible observar que sólo en los casos de Ecuador, Bolivia y Nicaragua están presentes los dos mecanismos (densidad del campo asociativo y apropiación de entornos), siendo el primero de los mecanismos de ámbito nacional solo en los dos países andinos, mientras que en Nicaragua es de ámbito regional (la costa caribe). Con base en esta constatación, la variable "solidar organizativa" sólo está presente en los tres países mencionados: Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

---

Marcos cognitivos: La construcción de discursos

Hasta este apartado se ha tratado el tema de las "estructuras de oportunidad", de "estrategias organizativas" y de "repertorio acción colectiva", pero para que se dé la activación de un actor político es necesario que haya elementos mediadores entre la oportunidad, la organización y la acción, y éstos son los significados compartidos y los conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación. Para que se creen actores políticos es imprescindible que los colectivos se sientan agraviados y crean que la acción colectiva puede contribuir a solucionar la situación.

Los Fél desarrollan una importante tarea en la producción simbólica ya que la acción colectiva no depende sólo de los rasgos estructurales de una sociedad, sino también de las "cosmovisiones" compartidas o, como lo definen diversos teóricos (Snow et al., 1986; Snow y Benford, 1998; Eyerman y Jamison, 1991), de los "marcos de acción colectiva". Según estos autores, que desarrollan la obra seminal de Ervin Goffman, los "marcos" son representaciones simbólicas utilizadas para indicar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir formas de acción alternativas. Los marcos cognitivos pueden definirse como los discursos culturales para describir significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva.

Pero el proceso de creación de marcos —también llamado "enmarque"— no parte de cero, sino que es el resultado agregado de la experiencia personal, la memoria colectiva y las prácticas objetivadoras que habitualmente asociamos al concepto de cultura. Por ello, si bien los
discuro con significados políticos contrarios a las medidas “neoliberales” impulsadas por el gobierno. 46  

En esta “doble tarea”, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia han tenido éxito. En los dos casos el discurso étnico no ha sido “esencialista”, sino que se ha manifestado incluyente con los diversos pueblos indígenas, a la par que ha conseguido presentarse como una sensibilidad directamente enfrentada a las políticas neoliberales y privatizadoras (Brysk, 2000; Brysk y Wise, 1995). El caso de Nicaragua es más complejo. En la tarea de generar un discurso “inclusivo” ha destacado siempre el recurso de la “identidad costeña” frente a la del resto de nicaragüenses (que en la costa se les denomina españoles), a pesar de ciertos conflictos intraétnicos 47. En cuanto al discurso antineoliberal, si bien en un inicio el movimiento indígena se enfrentó a las políticas impulsadas por la revolución sandinista, a partir de los años noventa los think tanks costeros (como el CIDCA o URACAN) y los dirigentes indígenas han ido elaborando un fuerte rechazo a las políticas neoliberales y se han activado luchas para proteger sus territorios y recursos 48.  

En México, los movimientos indígenas, debido a su heterogeneidad y dispersión, no han tenido la capacidad de elaborar un discurso indígena que supere el ámbito comunal,49 aunque sí ha habido coincidencia en las organizaciones indígenas en la crítica hacia las políticas privatizadoras impulsadas por las diversas administraciones (Warman, 2003: 246-272; Aragón Andrade, 2007: 77-115). En Guatemala

46 Los trabajos de Wise y Brysk (1995) y Vashur (1998) enfatizan la importancia que ha tenido la lucha contra las medidas neoliberales en el proceso de construcción del discurso étnico en aquellos lugares donde se han desarrollado amplias movilizaciones de carácter étnico. Este debate se analiza de manera amplia en el discurso étnico en aquellos lugares donde se han desarrollado amplias movilizaciones de carácter étnico. Este debate se analiza de manera amplia en el discurso étnico.  

47 Los conflictos intraétnicos en Nicaragua nunca han sido importantes; con todo, cabe destacar una cierta posición de supremacía del pueblo miskito frente a los mayagna y taura.  

48 En esta dirección, véase el célebre caso de Awas Tigni, así como la determinación de las comunitarios para delimitar sus territorios ancestrales para preservar sus recursos naturales frente a la voracidad de las empresas transnacionales y el mismo Estado nicaragüense (Gourdin, Hale y Gordon 2004).  

49 El trabajo sobre las elites indígenas mexicanas realizado por Gutiérrez Chong (2001) demuestra la falta de un discurso unitario entre los diversos pueblos indígenas. Incluso en el estado de Chiapas, con una relevante población indígena en términos reales y relativos, el “étnico” no supone un elemento integrador, y otros elementos —adscripción ideológica, militancias organizativa o estratificación social— ejercen mayor poder aglutinador.

45 Véase sobre este tema el texto de Máz (2004)
y Perú, a pesar de algunos esfuerzos dirigidos a la creación de una identidad "pan-maya" en el país mesoamericano, el discurso indigenista no ha tenido la capacidad de trascender la pertenencia comunitaria. Tampoco, en ninguno de los dos países, se ha enraizado —a través de las organizaciones indígenas— un discurso beligerante y continuo frente a las políticas neoliberales de los diversos gobiernos.

Con base en lo expuesto pretendemos elaborar la variable "discurso movilizador". En este ejercicio se considera que éste ha existido cuando los movimientos indígenas han sido capaces de elaborar un discurso de "indianidad" integrador y/o una conexión entre el discurso étnico y el de rechazo a las políticas neoliberales. Así las cosas, tal como se muestra en el cuadro 9, esto ha ocurrido (y hay presencia de la variable) en Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua.

**CUADRO 9**

**CONSTRUCCIÓN DE LA VARIABLE "DISCURSO MOVILIZADOR"

<table>
<thead>
<tr>
<th>País</th>
<th>Discurso de &quot;indianidad&quot; integrador</th>
<th>Conexión con discurso antineoliberal</th>
<th>Presencia de la variable</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bolivia</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecuador</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Guatemala</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>México</td>
<td>0</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Nicaragua</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Perú</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**RECAPITULANDO: ¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?**

Desde sus orígenes, el estudio de la vida política ha ido vinculado a la comparación, entendiéndola como el acto de revelar y resaltar diferencias entre distintas realidades que nos interesan para poder explicar "el porqué" de ciertas cosas (Morlino y Sartori, 1994). Con esta pretensión se supone que es posible explicar las propiedades (o características) de ciertos casos a partir de sus atributos.

Extraer inferencias explicativas es el objetivo más ambicioso y difícil de la comparación, y por ello demanda un tratamiento más elaborado. Cuando queremos explicar por qué las cosas son así y no de otra manera, un estudio centrado en un único caso es problemático y, por lo tanto, es necesario recurrir a la comparación. Pero esto nos obliga a plantearnos cómo debemos realizar las comparaciones para que resulten útiles a nuestros objetivos explicativos (Llamazares, 2004).

En este texto, como señalamos al inicio, recurriremos a la técnica comparativa de análisis denominado booleano, que se basa en la lógica del mismo nombre. Este tipo de análisis permite considerar de manera sistemática los efectos de las combinaciones de variables independientes (que son las ocho confeccionadas a lo largo del segundo apartado del presente texto) sobre la variable dependiente (que hemos definido al inicio como una variable dicotómica de relevancia o irrelevancia) y hacerlo con un número de casos considerable: los seis países analizados.

Este método consiste en elaborar tablas en las que se recogen las características de los casos en las variables independientes que interesa analizar, sabiendo cuáles son las dependientes. Con ello, la lógica booleana permite identificar posteriormente las combinaciones posibles más simples de causas que dan lugar a los resultados que queremos explicar. Con ello es posible avanzar en la explicación de fenómenos y, a veces, aportar alguna luz a las teorías que pretenden explicar dichos fenómenos.

En el análisis que presentamos se aplica esta técnica, elaborando un cuadro (el 10) en el que se cruzan los casos analizados con las siete variables independientes (y sus valores) que se han ido confeccionando en el apartado anterior. Una vez expuesta la tabla de "ausencia" o "presencia" de las variables es necesario ver si es posible eliminar —pot coincidencia— alguna de las columnas de variables, con el objetivo de identificar las combinaciones más simples de causas que dan lugar a los resultados que nos interesa explicar. En esta labor observamos en el cuadro 10 la total coincidencia de valores entre las tablas de la variable que se refiere a la elaboración de un discurso movilizador y la que se refiere a la capacidad contenciosa —cuando columnas se destacan con una pantalla gris.
Al coincidir se establece que puede eliminarse una de las columnas, ya que no aporta ningún dato diferencial, y así se simplifica la ecuación.  

Posteriormente se otorga una letra del alfabeto (de la "A" a la "F") a cada una de las variables con las que hemos trabajado, donde la grafía en mayúscula significa presencia de la variable y en minúscula significa ausencia. La asignación de "letras" y variables sería la que muestra el cuadro 11, y acto seguido el cuadro 12 muestra la "ecuación" de variables independientes que tiene cada país (según lo expuesto en el cuadro 10) y el valor de las variables dependientes.

En el cuadro 12, en la tercera columna, aparece la variable dependiente resultante para cada país, siendo "R" relevancia y "r" irrelevantia. Con ello intentaremos, seguidamente, elaborar inferencias y teorizar sobre las relaciones existentes entre las variables independientes y la dependiente.

---

Este cuadro 10 muestra el cruce de los casos con el valor de las variables construidas. En el cuadro 11 se muestra la asignación de una letra a cada variable. En el cuadro 12 se presentan las ecuaciones de variables independientes y el valor de la variable dependiente para cada país.

---

La inclusión de una variable relevante ("R") y una variable irrelevantia ("r") permite una mejor comprensión de la relación causal entre los partidos éticos y su presencia en los países analizados. Las relaciones complejas pueden ser inferidas a través de estas ecuaciones, lo que nos permite avanzar en el entendimiento de las dinámicas políticas de los países latinoamericanos.

---

Nota: El texto ha sido normalizado para que sea legible y coherente, pero no se han modificado los contenidos originales.
desentrañar gracias a las teorías de la acción colectiva. Del abanico de teorías con el que hemos trabajado es posible afirmar que el conjunto de variables ABCDe supone la existencia de una “estructura de oportunidades políticas” abierta y la ausencia de un conflicto armado de carácter genocida reciente, mientras que el conjunto DF se refiere a la presencia de una organización sólida, con capacidad disruptiva y con un discurso consistente de identidad y denuncia.

En la dirección expuesta, es posible pensar que hay un nexos causal entre las variables independientes y que la combinación de propiedades ABCe en los casos analizados permite explicar la presencia DF (que sería un conjunto de variables endógenas al modelo). Y DF sería a la vez el factor (la causa simple) del terminante R, de relevancia.

Después de lo observado deberíamos confirmar que los PÉ no son el resultado natural o automático de la existencia de divisiones étnicas, culturales o lingüísticas en una sociedad, ni de que la población indígena sea mayoritaria —como se observa al contrastar el caso de Nicaragua con los de Guatemala o Perú. Precisamente por ello es necesario destacar qué nos cuentan las combinaciones (contraintuitivas) de Perú y Guatemala.

De la combinación de variables presentes en Perú (ABCDeF) se deduce una EOP abierta (ABC) que podría facilitar la aparición de organizaciones indígenas sólidas y con capacidad de activar un discurso y unas actividades propias. Sin embargo, no es así, tal como se observa en la combinación DF. En este sentido podríamos afirmar que el impacto del intenso y sanguinario conflicto (E) que se ensañó con la población indígena durante los años ochenta y principios de los noventa ha inhibido la aparición de un movimiento de matriz indígena bien organizado (F), con capacidad de generar actividades disruptivas (D) y un discurso que las pudiera dignificar, dando como resultado la irrelevancia política de esta comunidad que, como se observa en el cuadro 1 de este trabajo, representa a casi la mitad de la población.

En el caso de Guatemala, también se podría llegar a una conclusión semejante, aunque en este país centroamericano la ecuación de variables denota un espacio más restrictivo respecto a la “estructura de oportunidades políticas” (ABC), sobre todo después de los resultados del referéndum constitucional de 1998, en el que se invalidaron las reformas que hubieran otorgado un carácter multicultural a la Constitución. Pero, al igual que en Perú, podríamos señalar el carácter determinante de un conflicto bélico que tuvo características de genocidio (E). En este caso, tanto por razones de la cerrada EOP como por el impacto inhibidor de la violencia, no ha emergido ninguna formación indígena sólidamente organizada (F) con capacidad disruptiva y discursiva (D) que pudiera suponer la aparición de un PÉ relevante en la arena nacional, y ni siquiera ha habido una estrategia de apropiación del actor político que negoció los acuerdos de paz de 1996, la UNIC. 33

De todo ello, y a manera de conclusión, se podría afirmar que para que existan PÉ relevantes debe ocurrir previamente que ciertos actores tomen decisiones intencionales y estratégicas, sabiendo que estas decisiones sólo tendrán sentido en un entorno institucional abierto respecto al reconocimiento de la diferencia, con una organización territorial del poder descentralizada que les suponga un fácil acceso a recursos institucionales, con unas reglas de juego electorales permeables y un entorno donde los actores políticos clásicos estén fraccionados o en crisis. 34 Y todo ello con la prevención de que el recuerdo de episodios recientes de violencia extrema opera como un elemento inhibidor (o, mejor dicho, paralizante) 35 en este proceso de construcción de actores políticos.

De todas formas, esto no quiere decir, en los casos donde no aparece la ecuación ABCDef, que las comunidades indígenas o sus miembros no lleven a cabo actividades políticas, sino que lo hacen de otra forma. A veces a través de formaciones de carácter mestizo y otras, como diría James Scioti (2000), recurriendo a la intrapolítica. Pero el desarrollo de este último tema no corresponde a este ensayo.

33 Para observar la evolución de la URNC desde su creación a su desempeño electoral, véase Figuera y Martí (2006).
34 Esta que coincide, en gran medida, con lo que expuso Kitschelt (1989) a la hora analizar la lógica del desarrollo de las formaciones paritarias ecologistas en Bélgica y Alemania Occidental.
BIBLIOGRAFÍA


ESTRADA SAAVEDRA, Marco. La comunidad armada rebelde y el EZLN. México: Colmex, 2007.


__Las razones de presencia y éxito de los partidos étnicos en A L.__


Recibido: 27 de julio de 2007
Aceptado: 12 de agosto de 2008